

# *Explicaciones de una política exterior: la crisis de Melilla de 1893-1894*

*Carlos Ferrera Cuesta*

*Resumen:* Este artículo habla de la crisis de Melilla de 1893 y de las motivaciones de la política exterior de la Restauración. Desplaza las interpretaciones realistas e institucionalistas en favor de un análisis que niega el carácter unitario de las políticas estatales en el ámbito internacional. La regente y los gobernantes del partido liberal basaron sus decisiones en percepciones que combinaron el desconocimiento con el miedo a todo aquello que supusiera desestabilización del régimen político. Esto les hizo escoger una solución diplomática respetuosa del *statu quo* existente, en contra de una parte importante de la opinión pública.

*Palabras clave:* política exterior, restauración, Marruecos, diplomacia, Partido Liberal.

*Abstract:* This article looks at the Melilla crisis of 1893 and the reasons behind the *Restauracion's* foreign policy, replacing realist and institutionalist interpretations with an analysis that rejects the unified character of state policy in the international environment. The Regent and the Liberal Party based their decisions on perceptions combining ignorance with the fear of anything which would suppose the destabilization of the political regime. This led them to choose a diplomatic solution that maintained the existing *status quo*, contrary to the opinion of an important part of the public.

*Key words:* foreign policy, restoration, Morocco, diplomacy, liberal party.

Desde el siglo XIX se han desarrollado diversas teorías con la pretensión de explicar, y frecuentemente justificar, las políticas exteriores. En general, han procurado indagar en aquello que determinaba las relaciones entre los Estados, considerados agentes esenciales del escenario internacional; pero, igualmente, se han ocupado de las motivaciones de sus dirigentes, aspecto sobre el que versará básicamente este artículo.

Un primer bloque de aproximaciones ha sostenido la existencia de «intereses permanentes» de los Estados. Más allá de la geopolítica, que en un clima de expansión de las ideas organicistas identificaba a los Estados con organismos vivos cuya actividad externa venía determinada por constantes geográficas, y del idealismo, defensor de la política exterior guiada por principios, resalta, sin duda, el realismo. Tal corriente, de gran solera pues se remonta a Tucídides, aunque sólo fue formulada de forma explícita tras la Segunda Guerra Mundial, concibe a los Estados como sujetos unitarios en pugna por conseguir la mejora de su cuota de poder en el escenario internacional, cualidad imprescindible en toda política exterior que se pretenda autónoma.

El realismo ha ampliado progresivamente su capacidad explicativa; así, junto al denominado clásico, centrado en la búsqueda estatal de un poder traducido en beneficios económicos o en prestigio, aspecto que nos remite a las teorías del imperialismo o al marxismo, encontramos el realismo defensivo, según el cual los Estados persiguen en su pugna la mejora de su seguridad respecto a otras naciones; un anhelo que inspira las políticas de equilibrio de poder por medio de alianzas encaminadas a impedir hegemonías, pero también, como señala Van Evera en su explicación de los orígenes de la Primera Guerra Mundial, el recurso a las guerras preventivas. En ocasiones, la inseguridad de los gobernantes puede provenir de las propias poblaciones; peligro a resolver mediante el «imperialismo social», es decir, el recurso a la política exterior como válvula de escape de los conflictos internos. Asimismo, debemos citar el «realismo centrado en el Estado», planteado recientemente por Fareed Zakaria, que hace depender la política exterior no tanto del poder de la nación como de la disponibilidad de recursos proporcionada a sus dirigentes por el régimen político. Por último, la aplicación del enfoque sistémico a la visión anterior ha llevado al neorealismo, cuyo principal exponente es Waltz, quien sostiene la existencia de una estructura internacional —bipolar o multipolar, según haya dos o varios Estados hegemónicos—, que

incide en el comportamiento realista de los Estados, aunque, a la vez, los cambios en la distribución de poder de estos últimos puedan modificar aquélla<sup>1</sup>.

El realismo ha sido cuestionado por institucionalistas como Keohane o Nye, quienes estiman errónea la concesión de un carácter sin fisuras al poder como motor de la política exterior, al no ser éste «intercambiable»; es decir, ser poderoso en un campo no implica serlo en todos, como demostraría la pérdida de hegemonía de los Estados Unidos en ciertos sectores. Por otra parte, siempre desde esas posiciones, la dinámica internacional no se explica únicamente por la anarquía de los realistas y sus Estados en perpetua lucha por acrecentar su poder o su seguridad, pues la actuación estatal también busca la cooperación y puede regularse a través de organizaciones intergubernamentales, regímenes internacionales (como puede ser el sistema monetario) y convenciones<sup>2</sup>.

Pese a sus diferencias, sin embargo, al referirse a las motivaciones ambas corrientes comparten la idea de la racionalidad de los gestores de la política exterior. Tal visión ha sido puesta en duda por autores que, identificándose con aquellas interpretaciones de forma general, han reconocido límites al imperio de la razón en la toma de decisiones a causa de las habituales carencias de información, de presiones, urgencias e inercias, llegándose a hablar, de acuerdo al principio de falsabilidad de Popper, de una racionalidad limitada por la cual los Estados desdeñan las soluciones más perjudiciales y se acomodan a las que estiman menos perniciosas. Jervis ha recordado, en este sentido, la percepción errónea de los estadistas europeos posteriores a la Guerra franco-prusiana, al recurrir a la carrera de armamentos y a la búsqueda de alianzas previas en la creencia de que no daría tiempo a encontrar aliados durante su desarrollo, porque los conflictos futuros serían igual de rápidos y poco costosos; por su parte, Wendt subordina los intereses materiales estatales a las ideas compartidas, a las normas y, en general, a la percepción elaborada sobre uno mismo y los demás, que acaba construyendo la identidad de cada

---

<sup>1</sup> VAN EVERA, S.: *Causes of War: Power and the Roots of International Conflict*, Ithaca Cornell University, 1999; ZAKKARIA, F.: *De la riqueza al poder*, Barcelona, Gedisa, 2000; WALTZ, K.: *Teoría de la política internacional*, Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano, 1988.

<sup>2</sup> KEOHANE, R.: *Instituciones internacionales y poder estatal*, Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano, 1993, pp. 91 y ss.; NYE, J.: «¿Es EEUU un imperio?», *El País*, 13 de febrero de 2004.

Estado en el escenario internacional. En una línea similar, Lacoste ha vinculado la geopolítica a la percepción, al desligarla de los factores geográficos en sí y unirla a las representaciones que los actores políticos tienen de ellos<sup>3</sup>.

Un segundo bloque de interpretaciones ha cuestionado la idea de Estado de las anteriormente enunciadas y su concepción como ente unitario, con una orientación bien definida, y unos dirigentes guiados por una racionalidad con o sin fisuras en la toma de decisiones. El propio Wendt reconoce que los Estados no pueden compararse en unicidad a los individuos; Graham Allison habla de modelos burocráticos, en donde la política exterior es el resultado de negociaciones entre grupos o entre sectores de las burocracias; Michael Mann prefiere hablar de un polimorfismo del Estado, con diversos poderes —militares, políticos y capitalistas—, que inciden, a veces de forma contradictoria, y complican las orientaciones exteriores; mientras que Molina y Cienfuegos destacan la complejidad de la política exterior actual por la multiplicidad de actores en la administración española<sup>4</sup>.

Un acontecimiento como la crisis de Melilla de octubre de 1893, importante en sí misma por anticipar mucho de lo ocurrido en el *Desastre* de 1898 y en los conflictos de Marruecos de comienzos del siglo XX, nos sumerge en las motivaciones de la política exterior del régimen de la Restauración, además de permitirnos valorar la utilidad de las aportaciones expuestas anteriormente en la explicación de las decisiones que condujeron dicho conflicto por determinados derroteros.

---

<sup>3</sup> Para la aplicación de las teorías de elección racional, véase DOUGHERTY, J., y PFALTZGRAFF, R.: *Contending theories of international relations*, Nueva York, Harper & Row Publishers, 1981, p. 478; JERVIS, R.: «Offense, defense, and the security dilemma», en ART, R., y JERVIS, R.: *Instrumental Politics. Enduring Concepts and Contemporary Issues*, Nueva York, Harper Collins, 2002, pp. 180–189; WENDT, A.: *Social Theory of International Politics*, Cambridge, Cambridge University Press, 1999; LACOSTE, Y.: *Dictionnaire de Géopolitique*, París, Flammarion, 1993, p. 3.

<sup>4</sup> WENDT, 1999, p. 372; «El modelo de Allison», en DOUGHERTY Y PFALTZGRAFF, 1981, p. 480; MANN, M.: *Las fuentes del poder social*, vol. 2, Madrid, Alianza, 1997, pp. 73 y ss.; MOLINA, I.; CIENFUEGOS, I., y RODRIGO, F.: «Las transformaciones organizativas de la política exterior española (1)», *Revista de Estudios Políticos*, 117, 2002, pp. 173–220.

## La crisis de Melilla

A la altura de 1890 el Imperio de Marruecos, pese a mantenerse independiente, no podía ocultar su decadencia. En numerosas zonas la autoridad del sultán era meramente nominal, al tiempo que la presión del colonialismo europeo se hacía patente en la imposición de las cláusulas comerciales de nación más favorecida o en los derechos de protección, mediante los cuales los europeos y aquellos marroquíes vinculados a compañías extranjeras escapaban al control judicial y fiscal del sultanato.

También en España, tras dos décadas de retraimiento motivado por la inestabilidad interna, había renacido la reivindicación del norte de África, cuya legitimidad descansaba en el lenguaje de la geopolítica. Así existió una «representación» dentro de la clase política, formada en una tradición histórica representada por obras como la de Modesto Lafuente o Castelar, y en la lectura de publicaciones muy populares en los círculos políticos españoles, como la francesa *Revue des deux Mondes*. Tal ambiente llevó a formular «derechos históricos» sobre Ceuta y Melilla, a considerarlas punto de partida de una expansión colonial, cada vez más presente en la agenda de las cancillerías europeas de los años ochenta, y a valorar aquellos territorios como esenciales para la seguridad. En este sentido, un diplomático como el conde de Benomar desarrollaba en 1881 una verdadera lección de geopolítica, al fundamentar el interés español en Marruecos en el temor a que una potencia europea pudiera bloquear desde allí las costas españolas y cortar toda navegación con las posesiones antillanas<sup>5</sup>.

En ese contexto ambas fuerzas dinásticas participaron en las incipientes sociedades geográficas y colonialistas que aconsejaban la expansión por África. Los liberales, decantados por una «penetración pacífica» basada en el comercio, defendieron la conservación del *statu quo* vigente hasta que España se fortaleciera; otro tanto ocurrió con los conservadores, cuyo líder, Cánovas del Castillo, abandonando su tradicional retraimiento propugnó una ocupación militar, aunque también la pospuso al futuro. Tal clima cambió en los años noventa, momento de mayor inestabilidad política y económica, congelando

---

<sup>5</sup> Benomar a marqués de la Vega de Armijo, 2 de junio de 1881, en Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, leg. 1331.

toda idea expansionista, sin que las citadas asociaciones colonialistas llegasen a constituir un grupo de presión de entidad.

Pese a ese retraimiento, la situación en la zona distó de ser tranquila. Los incidentes fronterizos con las cábilas cercanas a Melilla se intensificaron desde 1890; la tensión creció en el verano de 1893 por la decisión, sin duda no muy inteligente, de construir un fuerte en Sidi Guariach, en terrenos próximos a una mezquita y a un cementerio musulmán, ignorando las peticiones en sentido contrario de los jefes tribales. El ataque a los obreros encargados de levantar aquella fortificación despertó la típica oleada de indignación nacionalista, similar a la acaecida tras el agravio protocolario sufrido en el verano de 1883 por Alfonso XII a su paso por París de vuelta de un viaje por Alemania; a las manifestaciones de condena por el intento de anexión alemana de las Carolinas en 1885; o, finalmente, a la futura agitación nacida en los prolegómenos del conflicto hispano-norteamericano de 1898. Así, durante la tramitación de la crisis se sucedieron en varias localidades manifestaciones en las que se profirieron insultos a los «moros», protagonizadas por estudiantes y «jóvenes»; proliferaron reuniones de damas de la nobleza con el fin de rezar y coser vendas para los hospitales; y abundaron las suscripciones patrióticas para comprar fusiles. Tal clamor no fue del todo espontáneo, sino que estuvo canalizado por diversas instituciones. Entre ellas, destacó la acción de algunas sociedades defensoras de una economía y una política con más proyección internacional, como el librecambista Círculo de la Unión Mercantil o la Real Sociedad Geográfica; también la de la Iglesia, cuyo obispo de Madrid exhortaba a «poner a raya a los moros para recuperar el honor», mientras que el cardenal primado Monescillo censuraba la falta de hombres de gobierno con energía para ordenar una respuesta de dureza adecuada. A esas demandas se sumó la oposición política: dentro de ésta fueron muy combativos los grupos antidinásticos, en quienes la petición de acciones punitivas y la consiguiente crítica al gobierno por sus vacilaciones servían de punto de partida a una censura de la monarquía borbónica. Intervencionistas fueron carlistas y republicanos, de los que, con la excepción de Pi y Margall y de un Castelar próximo al partido liberal, salieron las declaraciones más entusiastas en favor de una acción militar<sup>6</sup>.

<sup>6</sup> Para las diferentes muestras de la explosión nacionalista del otoño de 1893,

En general, salvo las citadas excepciones dentro de los republicanos y las de socialistas y anarquistas, opuestos por principio a un conflicto considerado lesivo para la clase obrera, en el otoño de 1893 se desplegó una campaña de talante nacionalista, a la que se sumaron también, con resultados más graves para la estabilidad política, los conservadores y numerosos sectores militares. En dicha movilización se combinó la demanda de medidas contundentes destinadas a recuperar el «honor patrio», alimentada por la autocomplacencia sobre la capacidad y el valor de los españoles para amedrentar a poblaciones inferiores en arrojo, con el desprecio hacia los «bárbaros marroquíes» y las críticas al gobierno liberal por su inacción.

Aquella agitación no dejó indiferente a este último, arrastrado pronto a una sucesión de choques con las cábilas de las proximidades de Melilla. Tales combates, en los que la flota española arrasó indiscriminadamente varios poblados rifeños, terminaron con el saldo desfavorable de unás decenas de bajas entre los militares de la guarnición, incluida la de su jefe, el general Margallo, muerto en una emboscada a finales de octubre. En respuesta, el gobierno llegó a concentrar en Melilla, tras ciertos titubeos y muchas dificultades logísticas, más de 20.000 soldados con el fin de garantizar la defensa y emprender una posible ofensiva.

El realismo parece aportar una interpretación coherente de los sucesos. De hecho, en un documentado estudio Rodríguez González apeló de forma implícita a criterios propios del realismo defensivo, al vislumbrar una intención oculta de los gobernantes del partido liberal en la promoción de unos sucesos que habrían servido de válvula de escape a un régimen con problemas sociales y económicos. Sin embargo —sin negar esas dificultades—, no parece que existiera interés en emprender un conflicto para el que se reconocía la falta de preparación. Ya en 1892, cuando de la correspondencia mantenida entre la regente María Cristina y la reina Victoria de Inglaterra se desprendió la posibilidad de una intervención española en Portugal a fin de librar a la monarquía de ese país del peligro republicano, Sagasta había desaconsejado tal acción por la debilidad militar española y por la necesidad de reservar el ejército para el mantenimiento

---

véanse *El Liberal*, 5, 15, 16 y 30 de octubre de 1893, y *La Correspondencia*, 8 y 12 de noviembre de 1893.

del orden interno. Parecía obrar en esto de acuerdo al paradigma del realismo clásico: sin poder no puede existir política exterior activa. En efecto, como indicábamos anteriormente, pese al optimismo de los propios liberales a comienzos de la década de los ochenta sobre una recuperación económica capaz de sostener una diplomacia agresiva a medio plazo, en los noventa la economía comenzaba a padecer los efectos de la crisis mundial y desde el gobierno se defendía el llamado *presupuesto de paz*, que recortaba los gastos militares en beneficio de los de tipo reproductivo<sup>7</sup>.

Ahondando más y de acuerdo al «realismo centrado en el Estado», el problema no habría residido simplemente en una debilidad como país, pues el régimen de la Restauración fue incapaz o no quiso aprovechar los recursos de la nación. Por un lado, el sistema clientelar conducía al despilfarro de aquéllos; por otro, el sistema fiscal facilitaba la ocultación de la riqueza existente; finalmente, el temor al golpismo militar y a que cualquier transformación, en un campo en el que no existía acuerdo entre los partidos dinásticos, conllevara la ruptura del turno pacífico había frenado los intentos de reforma militar de la segunda mitad de los años ochenta, con lo que la mayor parte del presupuesto del ejército siguió consumiéndose en la atención de unas plantillas hipertrofiadas de oficiales en detrimento de la mejora del material.

Es cierto que los primeros pasos contradijeron aparentemente ese rechazo al conflicto. Por lógica, el clima belicista desatado no podía dejar indiferente al Gabinete. Aunque la política exterior no captó la atención de la población ni del grueso de la clase política —ni siquiera lo hace en las democracias actuales, según Casesse—, la influencia de una cierta opinión pública en situaciones que podían comportar un conflicto bélico resultó innegable en la Europa de la época. Fuese espontánea o manipulada por los propios gobiernos o sus opositores, respondiese a fenómenos coyunturales o a estereotipos fraguados en el tiempo, lo cierto es que los gabinetes la tuvieron en cuenta. Aunque en un país con elecciones falseadas como España tales influencias fueron menores aún, también tuvieron significación. Desde luego, diversos protagonistas del conflicto lamentaron sus inclinaciones; Martínez Campos comentaba molesto el exce-

---

<sup>7</sup> RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, A.: «El conflicto de Melilla en 1893», *Hispania*, 171, 1989, pp. 235-266. Para la intervención en Portugal en 1892, véase Archivo de Palacio, cajón 16/2.

so de patriotismo imperante en la Península y «el creerse en país de Jauja, cuando en realidad los reservistas (enviados a Melilla) desean irse»; y en la misma línea, Moret se quejaba de las informaciones transmitidas por la prensa porque influían en «el impresionable pueblo español», le hacían cambiar de idea con facilidad y pensar que la paz no requería una negociación ardua<sup>8</sup>.

Sin ser decisiva, la opinión ejerció un papel perturbador que mediatizó muchas de las decisiones. Movilizaciones como la ocurrida en la Estación de Atocha de Madrid, durante la despedida de algunos regimientos, en la que se mezclaron el dolor de los familiares con las demostraciones patrióticas, llegaron a convocar a más de cincuenta mil personas. Aunque pocas veces fueran tan nutridas, se temían las algaradas en la capital —sede del poder político— y su manipulación por las fuerzas antidinásticas; de ahí su frecuente prohibición, denunciada por la prensa militar. Asimismo, la toma de posición de instituciones, como la Iglesia o el ejército, o la actitud de carlistas y republicanos, quienes podían acusar a la monarquía de antipatriótica por olvidar la salvaguarda del honor nacional, afectaban a unos gobernantes, cuya estancia en el poder no dependía de los votos sino del favor regio. Eso, unido al hecho de que muchos liberales no eran ajenos a los valores nacionalistas relativos al honor mezclado con el desprecio hacia los yecinos marroquíes, como demostraba su exaltación de la Guerra de África de 1860, explica que en los primeros días de octubre el ministro de la Guerra, López Domínguez, prodigase declaraciones belicistas apelando al honor nacional, y que el de Estado, Moret, respondiese a un periodista de *El Heraldo* que le había interrogado a la salida del Consejo en los primeros días de la crisis: «¿Hay por fin notas (diplomáticas), señor ministro?» «Balas y no notas, es lo que estamos dispuestos a enviar a esos salvajes».

Sin embargo, las decisiones adoptadas no se supeditaron a la opinión en una época en que el resto de la diplomacia europea se caracterizaba también por su secretismo. Hubo ejemplos de ello en Italia, donde Crispi se aproximó a Alemania en la segunda mitad de los 80 pese al sentimiento mayoritariamente profrancés de la pobla-

---

<sup>8</sup> CASSESE, A.: *Parliamentary control over foreign policy*, Mayland, Sijthoff & Noordhoff, 1980; Martínez Campos a Moret, 5 de diciembre de 1893, en Biblioteca Nacional, sección manuscritos. Moret a Martínez Campos, 14 de diciembre de 1893, en Academia de la Historia, Fondo Romanones, leg. 62, núm. 10. El resto de la correspondencia entre ambos personajes procede de la misma fuente.

ción; en el acercamiento inglés a Rusia en la primera década del siglo xx frente al rechazo de la opinión y de parte del gabinete liberal y laborista; o en el caso de la política colonial francesa de los ochenta, realizada a espaldas de la inclinación revanchista que prefería centrar en Alemania los esfuerzos exteriores. Por tanto, desde el comienzo de la crisis la vocación belicista quedó atenuada por fuertes dosis de prudencia. Así, desde los momentos iniciales los ministros acompañaron las declaraciones anteriores con otras mucho más mesuradas en las que se recordaba la inconveniencia de romper el *statu quo*, al tiempo que la prensa adicta lamentaba «las exageraciones» publicadas por otros diarios<sup>9</sup>.

Más tarde, el fracaso militar de finales de octubre, con la muerte de Margallo, impulsó la búsqueda de una solución negociada. Ya en los días previos a aquel suceso hubo un intento desde el Gabinete de desvincularse de la trayectoria seguida por las operaciones; Moret y López Domínguez acusaron a Margallo de «temeridad e improvisación» y censuraron su forma de conducir el conflicto. En el fondo, y más allá de desacuerdos puntuales, existía la certeza de que la guerra contra un enemigo invisible requería una preparación militar de la que se carecía, como bien sabían los gobernantes liberales. La movilización de los 20.000 reservistas, espoleada por la opinión, generó muchos temores: de hecho, fueron repatriados en enero de 1894, en cuanto se iniciaron las negociaciones. Se pensaba que las condiciones de vida en la reducida plaza y la previsible ausencia de triunfos convertía a la tropa en caldo de cultivo para la propaganda de los republicanos de Ruiz Zorrilla y de los anarquistas. De esta forma, si bien los políticos liberales pudieron comportarse de acuerdo a los criterios del realismo defensivo, en ningún momento buscaron una válvula de escape a los problemas internos provocando un conflicto, sino que con su conducta intentaron evitar una contienda cuyo balance sólo podía ser desestabilizador para el régimen político<sup>10</sup>.

<sup>9</sup> La descripción de la despedida de Atocha, en *El Imparcial*, 30 de octubre de 1893. La prohibición de manifestaciones en favor de la guerra, en *El Correo Militar*, 31 de octubre de 1893. Declaraciones encendidas de los ministros, en *El Liberal*, 6 de octubre de 1893; la frase de las balas y las notas, en *La Época* del mismo día; las prudentes, en *El Liberal*, 5-7 de octubre de 1893.

<sup>10</sup> La acusación de los ministros a Margallo, en *El Correo Militar*, 10 y 21 de octubre de 1893. Los peligros de un contingente numeroso en Melilla, en Moret a Martínez Campos, 3, 8 y 14 de diciembre de 1893.

Hasta aquí, no obstante, los enfoques realistas no explican de forma plenamente satisfactoria la actuación estatal durante la crisis, pues parten de una concepción unitaria cuando aquélla presentó fisuras y estuvo mediatizada por los intereses contrapuestos. Sin que pueda hablarse para el momento de una burocracia encargada de la política exterior, ni de la influencia decisiva de grupos con intereses económicos, nos centraremos en el ejército, el partido conservador, la Corona y el Gabinete.

Desde luego, el ejército no tuvo un papel irrelevante en los sucesos estudiados. El propio ministro de la Guerra, López Domínguez, acusó a las autoridades militares de Melilla de actuar por su cuenta al decidir la construcción del fuerte de Sidi Guariach, aunque desde la prensa militar se negó ese supuesto. No era el primer síntoma de descoordinación —y así se había hecho patente en el incidente del islote Perejil en 1887— entre las autoridades civiles y un ejército, a quien el régimen de la Restauración había concedido un amplio margen de autonomía. En cualquier caso y más allá de su responsabilidad en el inicio del conflicto, los militares condicionaron los movimientos del gobierno. Sin que sus posiciones fueran monolíticas, en la prensa militar se manifestó rechazo a las soluciones diplomáticas en beneficio de una respuesta armada que lavase el honor, un victimismo ante el abandono de las cuestiones militares por el gobierno, y el desprecio a éste por no estar a la altura de un pueblo valeroso<sup>11</sup>.

Por su parte, los conservadores podían ser considerados un órgano más del Estado por su capacidad de presión sobre la Corona y por lo previsible de su retorno al poder dado el funcionamiento del turno. En este sentido, los incluimos en un análisis que incide en la falta de homogeneidad estatal en política exterior. Como en los demás regímenes representativos del momento, en la España de 1893 la política exterior se hacía a espaldas del Parlamento. La cómoda mayoría gubernamental y las escasas discusiones sobre aquel ámbito de actuación gubernativa, circunscribían la toma de decisiones a un reducido número de personas del Gabinete, sin que las Cámaras ejercieran control alguno, salvo *a posteriori*, para censurar al Ejecutivo. Por ello, sus esfuerzos apenas tuvieron expresión parlamentaria, sino que

---

<sup>11</sup> El rechazo a las acusaciones de López Domínguez, en *El Correo Militar*, 20 de octubre de 1893. Este periódico, en unión de *La Correspondencia Militar* y de otros diarios menos conocidos, como *El Reducto* o *La Unión*, desplegaron el discurso crítico citado, compartido a veces por el gubernamental *Ejército Español*.

se ejercieron mediante una presión oficiosa en la prensa y privadas sobre la corte, coincidente con los militares en la necesidad de intervenir. De hecho, el liberal León y Castillo acusaba a Cánovas de halagar el pretorianismo del ejército ofreciéndole aventuras en Portugal y Marruecos. Éste se había sumado a las denuncias contra el gobierno, indicando que se debía traspasar las fronteras —lo que suponía romper el *statu quo* existente—; mientras que de *El Correo Militar*, de filiación conservadora, llegaron avisos a la Corona sobre el peligro de divorcio respecto al ejército, «el segundo poder del país tras ella», si no imponía una línea más agresiva al Gabinete<sup>12</sup>.

Sin duda, la actuación del ejército y de los conservadores forzó al gobierno liberal a enviar el contingente de 20.000 soldados a Melilla, pese a ser, como hemos visto, una solución poco grata. Las dudas gubernamentales se vieron, no obstante, aclaradas ante peligros más inminentes. Así, se recelaba de un pronunciamiento del ejército, si no se atendían mínimamente sus peticiones de intervención; de los conservadores se temía que convencieran a la regente, de cuya confianza dependía su permanencia en el poder, de la incapacidad del partido liberal para garantizar el orden y la monarquía. Aquélla no permaneció inmune a la presión y parece que emitió señales apremiando a una acción de fuerza pedida por esa opinión, aunque finalmente se inclinaría por la salida diplomática<sup>13</sup>.

La situación se complicaba para el gobierno fusionista, pues en su seno tampoco existía unanimidad. En la Europa de la época la política exterior se hacía en gran medida a espaldas de muchos miembros del partido gobernante, incluidos algunos ministros; por otra parte, fue práctica común en los gabinetes de la Restauración que los titulares de las carteras gozasen de amplia autonomía en su desempeño. Eso redujo a tres el número de protagonistas directos del conflicto: el ministro de la Guerra, López Domínguez; el de Estado, Moret; y, por último, y aunque no perteneciese al gobierno ni al partido, al general Martínez Campos. De este círculo hay que excluir al líder del partido fusionista, Sagasta, quien en esas fechas padecía una larga enfermedad y no se encontraba en condiciones físicas ni

<sup>12</sup> Fondo León y Castillo, leg. 22, folio 2.844. Declaraciones de Cánovas, en *El Correo Militar*, 16 de octubre de 1893. La amenazas a la regente en el mismo periódico de 15 de diciembre de 1893.

<sup>13</sup> El belicismo de la regente, en *La Correspondencia de España*, 7 de octubre de 1893.

ánimicas de ejercer su habitual liderazgo. De cualquier forma, hasta donde la expresó, su posición coincidió básicamente con la de su ministro de Estado <sup>14</sup>.

Ambos militares respaldaron oficialmente una solución diplomática, pero presionaron en favor de una mínima respuesta militar. López Domínguez con el fin de ganar prestigio entre unos compañeros de armas que habían censurado su aceptación del *presupuesto de paz*. En cuanto a Martínez Campos, compartió muchos de los criterios del gobierno: consideraba un error el enfrascarse en una guerra y mantener a 20.000 soldados inactivos, con las consiguientes «secuelas de indisciplina y malestar de los oficiales sin posibilidades de ascensos». Sin embargo, pareció discrepar del Gabinete al alertar de los peligros de la inacción, unida al temor por las consecuencias del regreso a la Península de unos soldados en pie de guerra «sin haber recibido una satisfacción» y defendió algún tipo de intervención «para contentar al ejército y a España».

Tales frases encubrían una desconfianza hacia el poder civil, presente en muchos de sus compañeros de armas, visible cuando pedía un gobierno militar en Melilla que enderezase «los errores de la colonización española»; o de forma más significativa aún cuando afirmaba a López Domínguez, tras elogiar la relación mantenida por ambos:

[...] juntos podríamos hacer mucho por el ejército y por el país, dando un puntapié a la política <sup>15</sup>.

Finalmente, quedó al mando del contingente enviado a Melilla en perjuicio de las pretensiones de López Domínguez. En su elección pesó la presión de los conservadores, que vetaron públicamente a aquél desde *El Correo Militar* por incompetente, mientras defendían la opción del general conservador «demandada por toda la opinión». Éste contó, asimismo, con el respaldo de la regente y de Moret que, según *El Correo Militar*, decidieron de común acuerdo el nombramiento, respaldados por varios miembros del Gabinete y en oposición a Sagasta <sup>16</sup>.

<sup>14</sup> La incapacidad para gobernar de Sagasta, en Moret a Rascón, 2 de octubre de 1893, en Archivo Histórico Nacional (AHN), Estado, leg. 8661.

<sup>15</sup> Martínez Campos a Moret, 1 de diciembre de 1893, y Luque a López Domínguez, 10 de enero de 1894, en Biblioteca Nacional, sección manuscritos.

<sup>16</sup> *El Correo Militar*, 28 y 31 de octubre de 1893.

Para entender la elección de Moret puede ser clarificadora la crisis motivada por el nombramiento de Cassola como ministro de la Guerra en 1887, en la que también se había visto envuelto el ministro de Estado liberal. Enviar a Melilla al mando de un importante contingente militar a un general con influencia entre sus compañeros —y los dos indicados la tenían— podía propiciar una salida golpista de cualquiera de ellos. Aunque, en principio, la trayectoria monárquica de Martínez Campos daba mayor confianza que la de López Domínguez —sospechoso de veleidades republicanas en los años anteriores—, los llamamientos en la prensa de esas fechas en favor de un Gabinete dirigido por el sublevado de Sagunto no podían resultar tranquilizadores. Esto nos lleva al citado incidente de 1887, tal vez revelador del pensamiento de Moret. En ese momento, éste había amenazado con su dimisión y la de los ministros demócratas del Gabinete si se consumaba el nombramiento de Cassola en Guerra. Los argumentos esgrimidos partían del hecho de que en esa circunstancia Martínez Campos, a la sazón capitán general de Castilla la Nueva, al contar con un ministro afín —y Cassola parecía serlo—, podía repetir el golpe militar de 1875 frenando la liberalización de la Regencia acometida por los fusionistas. En el otoño de 1893 escoger a López Domínguez, rechazado además por los conservadores y por la regente, era peligroso; mientras que la fuerza de Martínez Campos, si era nombrado, podía ser contrapesada por el anterior desde el Ministerio de la Guerra<sup>17</sup>.

Esta decisión nos lleva a analizar la figura de Moret, esencial en el desenvolvimiento de los acontecimientos. Su preponderancia descansó en las carencias de la diplomacia española del momento. Dominador del inglés y el francés —algo inusual entre sus compañeros—, fue el intermediario predilecto con las embajadas extranjeras. Así, pudo imponer sus percepciones, que, en sintonía con María Cristina, perseguían la conservación de la dinastía.

Aunque la oposición, tras acusarle de aprovechar la enfermedad de Sagasta para imponer su criterio en el Gabinete, le hiciera responsable de la respuesta militar en la discusión parlamentaria de

---

<sup>17</sup> Un ejemplo de petición de un gabinete presidido por Martínez Campos, en *El Liberal*, 11 de octubre de 1893. Para la crisis de 1887, véanse los informes del embajador francés Cambon de 12 de febrero y 10 de marzo de 1887, en Ministère des Affaires Étrangères, París (MAE), leg. 910, así como en *El Día*, 13 de marzo de 1887.

la primavera de 1894, se le consideró, en general, el principal valedor de la solución diplomática y como tal fue blanco de las críticas de la prensa militar.

Quizá le costase oponerse al entusiasmo intervencionista de los primeros momentos, pero en su correspondencia de noviembre con el conde Rascón comentaba que «si Sagasta y la regente se hubieran inclinado por la guerra, él hubiera dimitido». De hecho, aunque las otras potencias no podían admitir una expansión de envergadura, ni Francia ni Inglaterra vetaron una respuesta militar limitada a «vengar por sí la injuria recibida»; sin embargo, en contra de las apreciaciones de López Domínguez o de Martínez Campos, aquélla no existió, dominando la línea negociadora de un Moret que despachaba directamente con la regente e impuso sus criterios. El mismo López Domínguez transmitía la coincidencia de Sagasta y Moret en la necesidad de salir de la situación de forma pacífica. Unanimidad que descansaba, aparte de en un reconocimiento de que la culpa del conflicto estaba del lado español, en el temor a que el ejército se convirtiese en un caldo de cultivo para conspiradores. Además, en el caso de Moret, decidido monárquico, su motivación trascendía el miedo a los soldados: el temor a que una intervención española provocase un contencioso, preámbulo de una guerra europea desestabilizadora de un régimen que en esos momentos no disfrutaba de gran solidez, como demostraban las dificultades de los tronos en Portugal e Italia. Finalmente, la resolución de la crisis por vía diplomática había de ser del agrado de un ministro de Estado que, al ver revalorizado su papel con el recurso a la diplomacia, reforzaba su posición en el Gabinete y el partido<sup>18</sup>.

Durante el verano de 1893 la pugna sostenida con Gamazo a fin de convertirse en el delfín del partido se había intensificado, con un saldo negativo para Moret. El fracaso de las medidas hacendísticas de Gamazo, unido a lo acontecido en Melilla, renovó, sin embargo, su protagonismo y reforzó sus posiciones en la remodelación del Gabinete de marzo de 1894. A tal reforzamiento colaboró el sistema diplomático del momento. En principio, toda aspiración espa-

---

<sup>18</sup> Moret a Rascón, 26 de noviembre de 1893, y conde del Mazo a Moret, 26 de octubre de 1893, para la posición inglesa en favor de una expansión territorial mínima, en AHN, Estado, leg. 8661; otro tanto en el informe del embajador francés de 26 de noviembre de 1893, en MAE, leg. 922. López Domínguez a Martínez Campos, 5 de diciembre de 1893, en Biblioteca Nacional, manuscritos.

ñola en Marruecos había de verse frenada por las pretensiones de competidores más poderosos como Francia, Inglaterra y en menor medida Alemania. La primera, desde los años ochenta, momento en que había tenido roces esporádicos con España, deseaba extender su dominio desde Argelia a fin de convertir todo el África Occidental en un coto exclusivo. Por su parte, Inglaterra, que había sostenido al Imperio Xerifiano con el fin de garantizarse un vecino cómodo al sur de Gibraltar, comenzó a variar de posición —o por lo menos ese convencimiento tuvieron las autoridades españolas— y se rumoreó sobre su interés en crear un dominio en el norte de Marruecos. Finalmente, Alemania, sin verdaderos intereses en la zona, hizo acto de presencia a fin de mostrar su rango de gran potencia<sup>19</sup>.

De acuerdo a los supuestos del neorealismo, en un sistema multipolar como el de fines del siglo XIX no podía existir cooperación entre sus miembros; éstos tendían a bloquear las situaciones y a vetar toda acción desestabilizadora —sobre todo si venía de un pequeño— por el temor a que alguno de los países hegemónicos pudiese obtener una ventaja suplementaria con el cambio. El institucionalismo ofrece un diagnóstico similar, si bien no lo cifra en la actuación aislada de los integrantes del sistema sino en la existencia de un marco normativo, difuso en este caso, que afianzó ese equilibrio. En este sentido, Palmer ha hablado de un sistema diplomático con unos códigos compartidos, marcados por las potencias del momento —Inglaterra, Francia, Rusia, Alemania y Austria— que proporcionó estabilidad.

Dicho sistema, con varias potencias de rango similar interesadas en la zona, restó forzosamente autonomía a España, al impedirle toda pretensión expansionista. Sin embargo, el sistema de equilibrios de fines del siglo XIX funcionó también en beneficio de la monarquía española. Aquí puede sernos de utilidad la aportación constructivista de Wendt; ateniéndonos a ella podemos comprobar la existencia de una percepción compartida por los políticos dinásticos y por las cancillerías europeas sobre la fragilidad de la monarquía de la Restauración. En este sentido, el embajador británico Wolf destacaba

---

<sup>19</sup> El predominio del sector moretista en el Gabinete tras la remodelación de marzo de 1894, en *La Época*, 13 de marzo de 1894. La impresión española sobre la política inglesa, en despacho del embajador en Madrid Wolf, 9 de enero de 1893, en BOURNE, K. (ed.): *The Papers of Queen Victoria on foreign affairs*, vol. 4, Bethesda, University Publications of America, 1993.

meses antes del conflicto de Melilla el éxito electoral de los republicanos reconociendo la incapacidad de la Corona para contenerlos en unos comicios si no existía colaboración entre conservadores y liberales en la preparación de aquéllos, cosa que no había ocurrido en tal caso por la orden de abstenerse dada por Cánovas. En enero de 1894 el mismo diplomático recomendaba una presión conjunta sobre el sultán de Marruecos por parte de la Triple Alianza, Inglaterra y de Francia a fin de que aquél pagase una indemnización a España y le evitase peligros desestabilizadores<sup>20</sup>.

Los propios políticos dinásticos compartieron ese temor y, sobre todo lo explotaron. En esto Moret fue un maestro, aunque no el único. Así, el 3 de noviembre, Wolf transmitía en nota confidencial la satisfacción del ministro español por la actitud británica y su intención de calmar a la opinión pública, «excitada por alguna prensa». El embajador francés transmitía el día 8 que Moret le había indicado que la inestabilidad en Melilla, unida al clima de nerviosismo imperante en el país por la crisis económica y social, podía hacer a éste ingobernable<sup>21</sup>.

La estabilidad de España interesaba a todas las potencias comprometidas en el sistema de equilibrio. Si bien la capacidad militar del país era desdeñable, su posición estratégica podía resultar crucial en el escenario mediterráneo. Un cambio de régimen o una situación de anarquía podían aprovechar a cualquiera de los Estados hegemónicos, sin que se supiera muy bien a quién. Como ha señalado Palmer, la diplomacia de los años noventa tuvo mucho de dar palos de ciego. Hubo interés en el equilibrio, desconfianza y poca comprensión de las acciones de los demás junto a cambios en el escenario internacional. La aproximación franco-rusa —anteriormente impensable para muchos— comenzó a ser vista con miedo por los ingleses, temerosos de perder la hegemonía naval en aquel mar, y por los italianos, cuyo embajador en Madrid era tranquilizado por la regente, quien negaba todo acercamiento a la república vecina en diciembre de 1894. Por tanto, existen evidencias de que hubo cooperación

---

<sup>20</sup> PALMER, A. *The Chancelleries of Europe*, Londres, George Allen & Unwin, 1983. Despachos de Wolf, de 12 de marzo de 1893 y 9 y 11 de enero de 1894, en BOURNE (1993).

<sup>21</sup> Nota de Wolf a Rosebery, en Foreign Office (FO). General Correspondence Spain 185/761. Roustan a Ribot, 8 de noviembre de 1893, en MAE, leg. 922. Un mes antes, el 18 de enero de 1894, informaba al embajador en Londres su acuerdo con la propuesta inglesa, en Archivo General de la Administración, Estado, leg. 6999.

entre las potencias —lo que refutaría a Waltz—; se pactó con ellas la indemnización, así como la posible compensación territorial, que Wolf cifraba en una ampliación del perímetro de la plaza inferior a dos kilómetros.

Sin duda tal proceso no estuvo libre de dobles juegos. Una buena muestra la dio Francia, pues en los primeros momentos de la crisis de Melilla buscó romper el *statu quo*, con la oferta a España de apoyo en la toma de Tetuán, posibilidad rechazada por la regente, quien veía peligrar su Corona en caso de un conflicto anglo-francés; hubo, asimismo, intentos de torpedear las negociaciones hispano-marroquíes entre algunos sectores de su diplomacia, aunque finalmente acabó respaldando las reivindicaciones españolas, según reconoció el propio Moret. En eso mostraba que su política tampoco era unidireccional: anhelaba, por un lado, que España rompiese el *statu quo* a fin de poder anexionarse a su vez territorios, pero temía la desestabilización española, un país en donde poseía importantes intereses económicos, así como la aproximación hacia Alemania de un Marruecos agredido<sup>22</sup>.

En suma, la diplomacia se impuso; lo hizo con todas sus dificultades, como la mejor forma de lograr una salida sin desprestigio ni ruptura bélica. Así, según confirmaba Moret al ministro de España en Tánger, el Consejo le había aprobado una iniciativa de paz, compuesta de tres puntos: la exigencia de intervención del sultán para imponer orden en la zona, el castigo a los culpables de los incidentes y una indemnización.

La propuesta contenía mucha prudencia. El deseo de conservar el *statu quo* aconsejaba no debilitar al sultán. El propio Moret consideraba que Marruecos sólo sobrevivía por el lazo religioso y la explotación de las rencillas europeas. Por ello, aunque vislumbrase en ciertos momentos la posibilidad de obtener algunos enclaves susceptibles de mejorar la situación defensiva de la ciudad, acabó desechando tal opción; así señaló, por ejemplo frente a Salmerón, la inconveniencia de expansionarse por un territorio de difícil control militar; en esto debió de chocar con Martínez Campos, como corro-

---

<sup>22</sup> PALMER (1983), p. 179. Las tranquilidades dadas a los italianos y el rechazo de la regente a tomar Tetuán, en despachos de Wolf de 30 de diciembre de 1894 y 17 de noviembre de 1893, respectivamente, en BOURNE (1993). Wolf a Rosebery, 6 de diciembre de 1893, en FO 185/761. El apoyo general de Francia, en Moret a Rascón, 8 de noviembre de 1893, en AHN, Estado, leg. 8661.

boraron las sucesivas comunicaciones con el general en las que resaltó la ausencia de interés de esos territorios. Más allá de la compensación moral, tampoco quiso un castigo excesivamente duro que pudiese despoblar la zona, privando de abastecimientos a Melilla. Por último, la cuestión de las indemnizaciones —pactada también con las potencias— presentó más dificultades de las previstas, pues no se conocía la situación real de las finanzas del Imperio Xerifiano, se temía fijar una cantidad no asumible o, peor aún, que obligase a Marruecos a contratar un empréstito con alguna potencia europea a cambio de la garantía de la renta de aduanas, única que podía ofrecer, que diese a esa nación una ventaja estratégica en la zona<sup>23</sup>.

A partir de estos condicionantes, se emprendió una negociación jalonada de problemas, patentes en las instrucciones e impresiones intercambiadas por Moret con Martínez Campos, nombrado embajador extraordinario el 28 de diciembre de 1893. A las dificultades comunes a la diplomacia de la época —entendimiento incorrecto de los telegramas recibidos, escasez de intérpretes, existencia de supuestos espías que trabajaban para otras potencias o desconocimiento del terreno— se sumaban los límites propios de una relación con entidades a las que, como ha señalado Windler, la doctrina legal europea no consideraba sujetos de derecho público internacional y rodeaba de prejuicios culturales. Moret fue un ejemplo de ello cuando, imbuido de positivismo, quiso asentar su diplomacia en el conocimiento del antagonista, logrado a partir de una cierta psicología social.

Su descripción de la mentalidad marroquí compartía los tópicos de la visión ilustrada, crítica con unas poblaciones a las que censuraba su fanatismo religioso, origen del despotismo y atraso científico en que vivían, y que fue muy común en la sociedad española —y también europea— del fin de siglo. Así, Moret recomendaba a Martínez Campos la exhibición de la fuerza como elemento intimidatorio, «único lenguaje que entienden». Esto le llevaba a planear el mantenimiento en Andalucía de 12.000 de los soldados repatriados de Melilla y

---

<sup>23</sup> La posible obtención de enclaves próximos a Melilla, en Moret a Martínez Campos de 3 de diciembre de 1893. La inconveniencia de esa expansión territorial, en cartas de Moret a Martínez Campos de 10 y 23 de diciembre de 1893. La respuesta a Salmerón, en DSCD, 10 de mayo de 1894, p. 4080. El visto bueno de las naciones europeas a la indemnización, en Moret a Martínez Campos, 19 de febrero de 1894, en *Documentos parlamentarios presentados por el ministro de Estado* (1894).

de la escuadra en Cádiz en apoyo de las conversaciones. También le aconsejaba rodearse de la pompa que «atrae a las imaginaciones orientales»: la embajada debía ser nutrida y estar compuesta preferentemente por militares «por la fascinación de los uniformes», también por frailes, que «hacían buen efecto»; todo con el objeto de impresionar a los marroquíes, atraídos en su superstición por la autoridad de los personajes importantes, «algo parecido a lo que sentimos nosotros por los reyes»<sup>24</sup>.

Pese a esos consejos, los temores a debilitar al sultán, y el doble juego de éste dificultaron las negociaciones. La correspondencia entre Moret y Martínez Campos parece indicar que el primero no sabía muy bien a qué atenerse en cuanto a las verdaderas intenciones del dignatario marroquí: en ocasiones se declaraba convencido de su voluntad negociadora y aconsejaba al general español que no diese ningún ultimátum, mientras que en otros casos pedía firmeza.

Sin duda, Muley Hassán utilizó todas las bazas que pudo para reducir las exigencias españolas, alegó incapacidad para actuar en la zona y aprovechó los recelos de las potencias extranjeras. En el primer supuesto las dificultades del sultán para imponer su dominio en la zona —magnificadas o no— fueron reconocidas, junto a lo reducido de las rentas aduaneras del Imperio, el 27 de febrero por el propio Martínez Campos en carta a Moret<sup>25</sup>.

Por todo ello el balance de la campaña fue bien pobre. El 5 de marzo de 1894, con la firma del Tratado de Marraquech, se obtuvieron una serie de compensaciones: el castigo a los cabecillas de las cábilas implicadas en los incidentes, la exacta delimitación de la frontera con el establecimiento de una guardia de interposición de 400 soldados del sultán y una indemnización de 20 millones de pesetas; por contra, se autorizaba el libre paso de los rifeños a la mezquita y al cementerio situados en los aledaños del fuerte. Sin embargo, un convenio adicional, firmado en febrero de 1895, pospuso

---

<sup>24</sup> WINDLER, Ch.: *La diplomatie comme experience de l'autre*, Ginebra, Droz, 2002. Para la visión española sobre los marroquíes, véase Martín Corrales, E.: *La imagen del magrebí en España*, Ediciones Bellaterra, Barcelona, 2002, pp. 99 y ss. Consejos de Moret a Martínez Campos sobre la manera de llevar la embajada, en cartas del 14 de diciembre de 1893, 6, 10 y 17 de mayo de 1894.

<sup>25</sup> La actitud a tomar frente a Muley Hassán aparece recogida en cartas a Martínez Campos de 7 de octubre y 3 de diciembre de 1893, la primera en *Documentos parlamentarios...* (1894). La segunda y dirigida el 27 de febrero de 1894, en Fondo Romanones, leg. 62, núm. 10(2).

todas las exigencias, salvo la de la indemnización en la que España tampoco había presionado excesivamente a Marruecos; así, la cuantía quedó en 20 millones de pesetas y no de francos oro —25 millones de pesetas—, como había pretendido Moret, con lo que no se cubrían ni los gastos de la operación bélica, y esta cantidad sufrió posteriormente nuevas rebajas.

## **Una política exterior fracturada**

Indudablemente, en una primera aproximación el enfoque realista podría servir para explicar la política exterior de un Estado limitado por su escasez de recursos y con unos dirigentes obsesionados por la seguridad. A su vez, el institucionalismo corregiría los criterios realistas, pues, si se recurrió a la cooperación, no fue sólo por debilidad, dado que existió autorización para una mínima expansión que habría servido para contentar a la opinión más belicista.

Sin embargo, sólo un enfoque no unitario del Estado puede darnos una verdadera dimensión de la crisis. Quienes podían decidir contemplaban la esfera internacional con criterios asociados a la geopolítica, a un lenguaje común de honor y a un idealismo que entendía la relación con Marruecos como algo obligado y beneficioso, en última instancia, para el sultanato. Dentro de ellos fue la regente quien tuvo la última palabra, pues, a su influencia en la política exterior, compartida con otros monarcas, añadía la llave del poder derivada de la concesión del decreto de disolución que garantizaba a los partidos dinásticos el acceso al poder. Con ella conectó Moret, defensor de la opción negociadora.

En su comportamiento ambos se guiaron por percepciones marcadas por el miedo a la inestabilidad externa e interna. Se receló de una operación, siquiera limitada, porque se desconfiaba del ejército; también porque con el grado de información existente se ignoraba a qué exigencias podía hacer frente Marruecos sin caer en una desestabilización, perjudicial a medio plazo.

El resultado del conflicto permitió al Gabinete liberal capear el temporal; sin embargo, dejó abiertas heridas. Aunque habían existido matices dentro de la política exterior antes de 1893 —más activa en los liberales que en los conservadores—, la crisis de Melilla rompió la línea unitaria mantenida hasta entonces.

Primeramente agudizó el divorcio entre una parte creciente del ejército y el poder civil. Con el honor como argumento, muchos militares hablaron de traición y de «gobiernos rifeños», de vergüenza y de una comedia, cuyo protagonista era Moret. Tal malestar y las acusaciones a los políticos se acrecentarían en el 98 con el *Desastre*, ayudando a la aparición de un ejército intervencionista en política. A su vez, los conservadores, por boca de García Alix, hablaron de una parodia de la guerra de 1860; el marqués de Lema lamentó que el incidente hubiera servido de acicate al afán independentista de los cubanos por la demostración de debilidad española. Desde ese momento, si los liberales renunciaron a una política exterior activa en favor del mantenimiento de la estabilidad asociada a la dinastía, los conservadores comenzaron a esbozar una política, concretada en la primera década de la centuria siguiente, que ponía en el horizonte la anexión militar de Marruecos como base del fortalecimiento y la popularidad de la monarquía. Tal divergencia quedó patente en el inmediato conflicto cubano y explicó la opción militar a ultranza del partido de Cánovas, representada por Weyler. Frente a ella, la crisis de Melilla revalorizó notablemente la alternativa diplomática entre los liberales, renacida en 1897, cuando la victoria militar en Cuba se mostraba a todas luces inviable. No es casualidad que Moret, ministro de Estado en 1893, fuese el encargado desde el Ministerio de Ultramar de plantear una salida pacífica al conflicto basada en la concesión de autonomía a la isla caribeña y en el apoyo diplomático. Desgraciadamente, en este caso la apuesta fracasó porque el mundo colonial y el actor principal —los Estados Unidos—, al que los demás no osaron enfrentarse, estaban fuera de ese marco diplomático europeo que había funcionado beneficiosamente para España en el asunto de Melilla <sup>26</sup>.

---

<sup>26</sup> García Alix, en DSCD, 28 de abril de 1894. Para los calificativos militares sobre el conflicto de Melilla, véase *La Correspondencia Militar*, 27 de noviembre de y 20 de diciembre de 1893.